

Desde diciembre del 2017 el Centro de Bienestar Animal (CBA) o Coso Departamental, permanece sin contrato, y en apariencia cerrado, aunque hay en su interior más de 100 perros y gatos, cuya manutención ha tenido que asumir impasible la empresa que lleva a costas la operación, eso sí, esperanzada en que se lo vuelvan a otorgar y así recoger el dinero invertido en todo este tiempo.

Esta es una práctica usual en la Gobernación –aunque es una de las que más tiempo se ha tomado– mientras que la Secretaría de Movilidad, inmovilizada al parecer en la oficina Jurídica, pueda abrir la licitación para la nueva operación del sitio.

Algunas voces al interior del Coral Palace observan además la existencia de una ambigüedad en la ejecución del contrato, por lo que se estaría buscado atraer la atención de una nueva empresa, “ojalá del interior del país”, que pueda cumplir también con la tarea de sacrificar a todos aquellos animales que una vez llegados al sitio cumplan un periodo mayor a un mes de estadía.

Según la misma fuente una cosa es la competencia por ley de la Secretaría de Movilidad con respecto al Coso Departamental, y otra es la pertinencia que debería tener la Secretaría de Salud, con el CBA. Se configuran dos objetos distintos. Según el nuevo ordenamiento, además, tendría que estar en un predio más amplio, con programa de rehabilitación, adopción, sensibilización y educación de tenencia responsable.

Al parecer, hay un proyecto en camino y se estudian los posibles terrenos pero hasta ahora no se ha visto nada en concreto y se tiene la sensación en buena parte de los grupos animalistas de que al fin de cuentas se ha estado acolitando al Gobierno Departamental, asumiendo su trabajo por compasión a los animales, mientras los funcionarios hallan la salida jurídica perfecta.

En síntesis, el Coso sería un lugar donde básicamente serían llevados los animales que pongan en peligro la movilidad de los conductores, retirar a los que se encuentren en lugares públicos, sitios turísticos, imponer multas a los dueños de semovientes que deambulan solos por las calles, y sacrificar a los perros y gatos que no sean adoptados en el término de un mes.

Desde la apertura del Coso en el año 2014 hasta el 2016 más de 800 perros y gatos de la isla fueron sacrificados.

Es motivo de reflexión, pero desde su inicio hasta fines del año 2017, se le han invertido a este sitio más de 2 mil millones de pesos; hasta se le acondicionó una clínica que se perdió en el desuso; de manera que lo que se ve cada día es el trabajo sacrificado y ad honorem de los animalistas, grupos y fundaciones locales, apoyados por la Policía Ambiental, la FAC, Armada y fundaciones del interior del país.

De otra parte, y debido a su discontinuidad en la prestación del servicio, incumplimiento del manejo de este sitio y otras razones, por estos días se podría materializar un incidente de desacato contra la Gobernación como desenlace a una acción interpuesta por la Procuraduría.

La semana que concluye, durante la audiencia adelantada en el Banco de la República por la Procuraduría y la Corte Constitucional sobre derechos de grupos vulnerables, le pregunté a una funcionaria la razón por la que –finalizando el sexto mes del año– aun no se había formalizado la contratación del CBA, y su respuesta, irónica por cierto, me dejó perpleja: “Porque los perros no votan”, contestó.